

Desde la liberación de Ingrid Betancourt, el 2 de julio de 2008, Colombia ha desaparecido totalmente de la agenda mediática y de las preocupaciones de la "people" y de los políticos, hasta entonces apasionados por este país. La misma suerte han corrido los rehenes secuestrados por la guerrilla y el asunto del intercambio humanitario. Justo hemos podido saber que, el pasado 13 de enero, el presidente Álvaro Uribe recibió, en Washington, de manos de su homólogo estadounidense George W. Bush –al final de un mandato cuyo balance ha sido calamitoso–, la Medalla Presidencial de la Libertad. Todo un símbolo...

Por nuestra enviada especial
PAOLA OROZCO SOUËL *

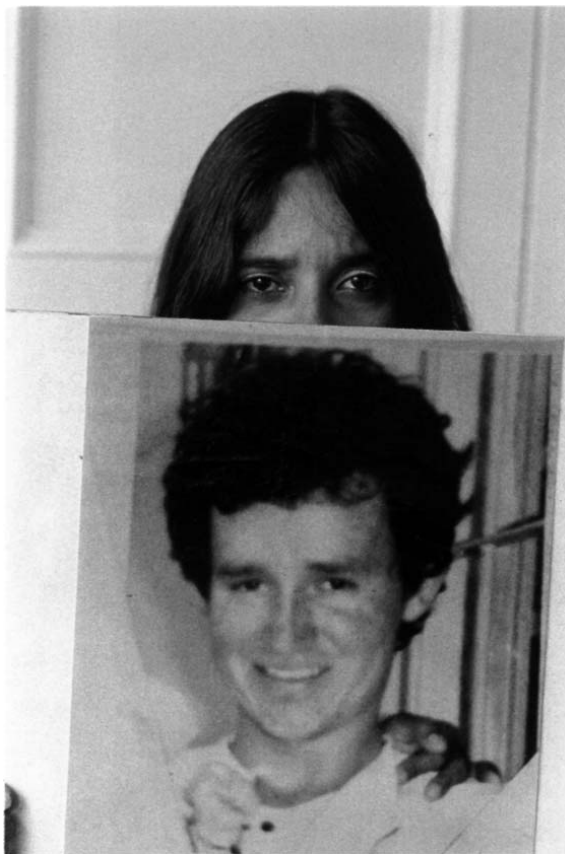
Centro de Bogotá. A la entrada de un rascacielos vigilado por cámaras, un guarda pregunta mecánicamente: piso, razón de la visita, documento, número de teléfono. A cambio, un pase autoriza a atravesar el hall, da derecho a un cacheo minucioso y permite el acceso a los ascensores. En el vigésimo quinto piso, otro guarda hace las mismas preguntas. Por último, dos puertas blindadas y una cámara de seguridad marcan la entrada a las oficinas: organizaciones de defensa de los derechos humanos, sindicatos, partidos políticos, organismos independientes. A veces, además de los guardaespaldas, una ambulancia sigue los trayectos de un político de la oposición que se desplaza en coche blindado.

¿Será un mito la "seguridad democrática", esa enérgica política del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien llegó al poder en 2002? Numerosos magistrados, miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG), sindicalistas, políticos e incluso algunos periodistas parecen pensar eso. Según Alirio Uribe, defensor de los derechos humanos, sólo algunos privilegiados –la élite, las empresas, las multinacionales– se ven beneficiados con dicha política. En cambio, "todos aquellos que critican la política del Presidente o se oponen a su régimen son satanizados". Cuando no asesinados. En silencio: los medios de comunicación están muy ocupados.

Muy ocupados cuando expresan una emoción legítima: "Ingrid Betancourt, rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)" (desde el 23 de febrero de 2002), o un alivio compartido: "Ingrid liberada!" (el 2 de julio de 2008); cuando se entusiasman definitivamente: "Betancourt se encuentra con Sarkozy", "IB' Women World Awards 2008/2009", "Santa Ingrid con el Papa", "La ex rehén vuelve a Colombia" con una única preocupación (por lo demás, incuestionable): "¿No más secuestros!"

El 28 de noviembre de 2008, cientos de miles de manifestantes ostentando camisetitas blancas atravesadas con la inscripción "Colombia soy

* Periodista.



Adriana Diosa, sostiene una fotografía de su pareja Pedro Pablo Benítez, militante del Frente Popular detenido el 28 de agosto de 1987 en Medellín (Colombia)

yo" desfilaron por las principales ciudades del país y por capitales extranjeras (París, Madrid, etcétera). Como en otras circunstancias, la manifestación, que gozó del apoyo (implícito) del poder colombiano y (explícito) de los medios nacionales y extranjeros, señaló con el dedo a uno solo de los protagonistas del conflicto colombiano: la guerrilla (1).

Curiosamente, el 6 de marzo de ese mismo año, una manifestación contra la violencia de Estado no se había visto beneficiada de la presencia de reflectores ni las cámaras: "Marchamos para protestar contra las fosas comunes, las masacres, los asesinatos, las desapariciones y los desplazamientos de población, pues se propagó la idea de que había que mostrarse más solidario con los rehenes, y con una rehén en particular, que con las víctimas del Estado y los paramilitares", explica Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y los Desplazamientos (Cod-

hes), una organización no gubernamental (ONG). Mientras José Obdulio Gaviria, primo hermano de Pablo Escobar (el difunto barón de la droga) y asesor del presidente Uribe, calificaba a esta demostración como "marcha promovida por las FARC", las Águilas Negras, nueva apelación de los grupos paramilitares, profirían amenazas de muerte contra los organizadores y los participantes. Sin embargo, convencidas de que la sociedad civil no debe flaquear "cada vez que los paramilitares o el Presidente las amenazan", como exclamó un manifestante, más de 300 000 personas se movilizaron en Colombia.

Una semana después, seis organizadores de esa marcha fueron asesinados. Diez sindicalistas corrieron la misma suerte en el lapso de un mes. Único consuelo: "Aunque no tiene los apoyos institucionales, económicos y mediáticos de los que gozó la marcha contra las FARC, en la cual nosotros participamos, la marcha del 6 de marzo rompió con la unanimidad que se nos quiere imponer y con la idea de que la violencia proviene únicamente de las guerrillas", cuenta un organizador.

Hostil a cualquier diálogo con la oposición armada, el jefe de Estado ha privilegiado la vía militar desde su llegada al poder. Entre 2002 y 2007, murieron 13 634 civiles, víctimas de la violencia política (2). Según el Codhes, de los cuatro millones de personas desplazadas a la fuerza desde 1985, tres millones lo fueron durante el gobierno de Uribe (3).

Para el abogado Sergio Roldán, esos traslados de población no se deben en nada al azar: "Los campesinos que se niegan a cultivar la hoja de coca son desplazados en beneficio de los narcotraficantes. Vía estratégica de transporte de armas y droga, la tierra es a la vez limpiada de su población en beneficio de los grupos armados. Al fin de cuentas, es una fuente de explotación comercial. Para las industrias nacionales e internacionales, su acumulación es un punto clave, en el que el Estado también está implicado".

Marco Romero, presidente del Codhes, calcula que el número de hectáreas expropiadas o "vendidas ilegalmente por funcionarios corruptos" asciende a 6 800 000. En este sentido, el caso del Chocó, la región de la costa del Pacífico donde viven las comunidades afrocolombianas, es emblemático. Miles de campesinos, obligados a huir de la violencia, abandonaron sus tierras "a los megaproyectos previstos para el cultivo de la palmera africana, utilizada en la fabricación de biocombustibles" (4).

"El periodo 'uribista' –cuenta Daniel Maes-

No todos

tre, desplazado de la comunidad Kankouamo –es el más represivo que nuestras comunidades (indígenas) jamás conocieron. Hacer valer nuestros derechos y territorios reconocidos en la Constitución de 1991 y en las Cartas internacionales es muy difícil." Víctimas de los paramilitares, de la guerrilla y del Ejército –implicado en más del 60% de los casos, según la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC)–, más de 1 200 indígenas fueron asesinados durante los últimos seis años. "La 'seguridad democrática' mató a más gente que a la que ayudó", confirma Jairo Chicaza, un indígena Embera-Katio (5).

Unos 40 000 indígenas que exigían del gobierno "respeto por sus vidas y la apertura de un diálogo" se movilizaron a partir del 12 de octubre de 2008. Violentamente reprimida por las fuerzas del orden –cuatro muertos y un centenar de heridos en la comunidad "La María Piendamó"–, la *minga* indígena (6) desmiente las acusaciones del presidente Uribe que justifican la acción militar. "Nuestro movimiento es pacífico y no está aliado con las FARC –afirma Ayda Quilcue–. Si no, si todos los que sufren con la gran crisis social son delincuentes, guerrilleros, como dice el Presidente, ¿entonces todos los colombianos son miembros de las FARC!"

Jessica Hoyos, joven militante de la asociación Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, no dice otra cosa: "Debemos recordar quiénes eran nuestros padres, porque murieron en la indiferencia más absoluta. No eran terroristas sino gente que, por su trabajo o sus convicciones, querían mejorar este país. Es sólo que si uno se pronuncia contra Uribe, enseguida se convierte en un antipatria, un guerrillero; por eso hay tantos muertos y tanta gente obligada a exiliarse".

El jefe de Estado se niega a admitir la existencia de un conflicto político en un país que padece una guerra interna desde los años 1950. La "amenaza terrorista" le alcanza como explicación. Para "pacificar" el país, el Ejército pactó hace tiempo con los paramilitares, que combaten masivamente

"Los métodos del Presidente Uribe no respetan los principios fundamentales de la democracia"

te contra... campesinos, estudiantes, profesores, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, periodistas y militantes políticos.

Las familias de las víctimas que habían depositado todas sus esperanzas en las audiencias judiciales previstas por la ley llamada "Justicia y Paz", adoptada en 2005 para "desmovilizar" a los paramilitares y echar luz sobre sus crímenes, enseguida se vieron desengañadas (7). Reunidas en torno al Movimiento Nacional de Víctimas de los Crímenes de Estado (Movive), hoy luchan contra el olvido y la impunidad "premeditada" del Presidente, quien extraditó a Estados Unidos a catorce de los jefes paramilitares más poderosos, donde serán juzgados por narcotráfico. En Colombia, acusados de crímenes contra la humanidad, podían hacer revelaciones incómodas sobre sus alianzas pasadas con la clase política. Más de 170 funcionarios del Estado ya se han visto implicados en el escándalo de "la parapolítica", un término que designa la colusión entre paramilitares, políticos y legisladores locales, cercanos o pertenecientes al movimiento del presidente Uribe. Entre ellos se encuentra Jorge Noguera, ex mano derecha del jefe de Estado y director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) (8), detenido (y luego liberado) por haber puesto esa institución al servicio de los paramilitares y por haberles entregado una lista de dirigentes sindicales, profesores universitarios y opositores para ser asesinados (9); Guillermo Cossio, fiscal del departamento de Antioquia y hermano del ministro del Interior y de Justicia, relevado de sus funciones por sus vínculos "narcoparas"; Carlos García, presidente del movimiento Partido U, etcétera.

Treinta y seis legisladores de la mayoría y dos ex presidentes del Senado están encarcelados, mientras más de 65 diputados de la mayoría están siendo examinados. Fue arrestado el general Rito Alejo del Río, ex comandante de la 17ª Brigada con base en Carepa (comuna de Urabá, dependiente del gobierno de Antioquia, departamento go-

Victorias militares

Si sigue el ritmo de los comunicados de las autoridades, cualquier observador atento del conflicto colombiano debería haber llegado hace tiempo a una conclusión sorprendente: ¡las guerrillas han desaparecido! Según las cifras del Ministerio de Defensa, 114 000 miembros de los grupos ilegales –guerrillas y paramilitares– fueron asesinados (más de 19 000), capturados, o bien se rindieron durante los últimos seis años (1). Pero por poco atento que esté realmente, el observador en cuestión no podrá menos que quedarse perplejo: en el apogeo de su poder, a fines de los años 1990, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se calculaban en 18 000 combatientes; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en 7 000, y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), contra los cuales el Ejército nunca luchó, en 12 000. Incluso tomando en cuenta la "desmovilización" de los paramilitares (2) y los hipotéticos reclutamientos masivos de la oposición armada –¡pero se supone que han sido derrotados!–, los números "no cuadran". ¿Mera jactancia? Seguramente. Pero no solamente.

Desde hace tiempo, los movimientos sociales denuncian el asesinato de campesinos o dirigentes comunitarios que las fuerzas del orden presentan como "subversivos" caídos en enfrentamientos. La práctica se vio confirmada cuando la Justicia abrió una investigación sobre la desaparición de once jóvenes marginales de Soacha, un barrio cercano a Bogotá. Sus cuerpos fueron hallados en septiembre de 2008, en una fosa común ubicada en Norte de Santander, a 400 kilómetros de allí. Después de secuestrarlos, los militares los presentaron falsamente como "guerrilleros caídos en combate". El escándalo llamado de los "falsos positivos" reveló entonces una práctica que no tiene nada de excepcional. Algunos oficiales empujan a sus hombres a "hacer número": se secuestra a ciudadanos desfavorecidos cuya desaparición no llamará la atención, o se los recluta bajo falsas promesas de trabajo. Luego se los lleva a una zona rural, donde se simula un enfrentamiento. Su muerte infla las cifras de "la lucha antiterrorista" y permite a los militares obtener premios, recompensas y condecoraciones.

El proceso judicial conllevó la destitución de 27 miembros de las fuerzas armadas, entre ellos tres generales, y la dimisión, el 4 de noviembre de 2008, del comandante en jefe del ejército, general Mario Montoya, que actualmente espera un cargo... como embajador en la República Dominicana.

MAURICE LEMOINE

(1) www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=384

(2) Curiosamente, más de 30 000 "combatientes" aprovecharon este proceso, en el marco del acuerdo Justicia y Paz de 2005, que abrió la puerta a suputaciones sobre la percepción de las ventajas materiales indebidas que estuvieron ligadas a esa desmovilización.

los colombianos se llaman Ingrid

bernado por Uribe entre 1995 y 1997) y responsable, según el jefe paramilitar Ever Veloza (llamado "H.H."), de la expansión del paramilitarismo en el país.

Paradójicamente, afirma Iván Cepeda, presidente del Movice, "estos acontecimientos vuelven nuestro trabajo más difícil todavía; el Presidente defiende a las personas vinculadas con los paramilitares y la mafia y nosotros nos convertimos en su blanco: veinte de nuestros dirigentes han sido asesinados desde 2005". Sobre todo en los departamentos de Sucre, Antioquia y Córdoba, donde "al imponer un régimen del terror, los *paras* deciden quiénes serán los representantes políticos, los decanos de las universidades, los funcionarios, etcétera. En una de esas zonas está la hacienda del Presidente, ubicada cerca de la de (el jefe paramilitar) Salvatore Mancuso. Podemos afirmar con seguridad que el que vive en la región, el que conoce la región, sabe lo que pasa allí".

Al igual que el diario *El Tiempo*, fuente de información de la prensa extranjera y propiedad de la familia del vicepresidente (Francisco Santos) y el ministro de Defensa (Juan Manuel Santos), los canales de televisión como RCN (Radio Cadena Nacional) y Caracol (Cadena Radial de Colombia) sirven como cajas de resonancia para la propaganda del poder.

Para aquellos que, en nombre de una prensa independiente, "luchan contra la visión falseada de la realidad, contra la unanimidad y el uribismo", como Antonio Morales, quien regresó al país tras seis años de exilio y dirige el nuevo diario *Polo*, las dificultades comienzan con las campañas "que impiden la distribución del diario y el acceso a la publicidad". Acusados por el Ejecutivo de "favorecer los actos terroristas" porque cubren "las violaciones de los derechos humanos", otros, como Holman Morris, periodista del programa de televisión *Contravía*, están amenazados de muerte. En suma, afirma este último, "no tenemos más alternativa que convivir con esas amenazas o practicar la autocensura". No es necesario señalar que, en las zonas paramilitares, la libertad de expresión y el pluralismo político han desaparecido.

Sin embargo, observa el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA) Gustavo Petro, "aun cuando estamos todos amenazados de muerte y padecemos la voluntad de destrucción del Presidente, los partidos de izquierda o de oposición existen en las ciudades. Es difícil matar a todo el mundo en la calle o acompañar con un arma a la gente que va a votar". Ello explicaría en parte la elección de alcaldes de la oposición en las tres grandes metrópolis del país: Bogotá, Medellín y Cali. "En las regiones de César y Magdalena—recuerda con orgullo el senador, al evocar esos feudos paramilitares donde no hay más que un candidato (¿el de ellos!)—, ganó el voto en blanco".

Aunque las manifestaciones de resistencia pacífica de la sociedad civil se multiplican, el temor a las represalias sangrientas persiste. "Con un gobierno tan autoritario e intolerante como el de Uribe, la oposición política no armada corre riesgos muy grandes—afirma Carlos Gaviria, presidente del PDA—; el gobierno no nos ve como una necesidad, sino como una traba a la democracia." Confrontado a los ataques del Presidente y a los múltiples asesinatos de sus dirigentes, este nuevo partido, que reine a la izquierda del país, todavía recuerda el exterminio (4 000 muertos) de los militantes de la Unión Patriótica en los años 1980 (10). Ante ese hito de la historia política de Colombia, ¿cómo no se va a considerar que existe "una lógica de Estado que empuja a la sociedad civil a la lucha armada"?

Deseario de postularse para un tercer mandato, el Presidente sueña visiblemente con desmantelar la Constitución de 1991. Ya ha logrado revisarla, no sin antes comprar los votos de algunos parlamentarios, para hacerse reelegir en 2006 (11). Para Fernando Cifuentes, procurador de la República, "los métodos del Presidente, las violaciones al texto constitucional y la 'parapolítica' no respetan los principios fundamentales de la democracia. Si esto sigue, nos dirigimos a una dictadura totalitaria".

Según los testimonios, la llegada de Uribe a la cabeza del Estado, en efecto, no ha servido de mucho para la Justicia. "El ejecutivo ejerce una verdadera presión sobre nosotros por las vías económica y política—exclama Esperanza Delgado, presidente de Asonvalle del Cauca (un sindicato de magistrados)—. Trabajamos con uñas y dientes y la Justicia no es respetada. Algunos fiscales



Desplazados en consultorio de Médicos Sin Fronteras. Altos de Cazucá (Colombia), julio de 2008.

GERVASIO SANCHEZ

nombrados por el procurador general de la Nación, él mismo elegido por el Presidente, han de actuar como se les pide, porque si no se les destituye o se les asesina. En el ámbito de la 'parapolítica', la Corte de Justicia tiene las pruebas y los testigos para juzgar y condenar a los diputados. Pero en lugar de dejarla hacer su trabajo, el Presidente la ataca apenas tiene la oportunidad de hacerlo".

Una intervención patente es el caso de Mario Uribe, senador y primo del Presidente. Acusado y condenado en abril de 2008, el vicéfiscal general lo liberó cuatro meses después "por falta de pruebas". El fiscal Ramiro Marín, que había ordenado su arresto, renunció, "no porque Mario Uribe haya sido liberado, sino porque, en el proceso, la independencia de la Justicia fue pisoteada y con ella mi honor personal, familiar y profesional. Para mí estaba claro que había una suficiente cantidad de pruebas reales como para proceder a un arresto" (12).

Mientras la Justicia utiliza la ley para tratar de luchar contra el absolutismo presidencial, las estrategias del Gobierno para deslegitimar a los funcionarios de la Corte Suprema emanan de la Casa de Nariño, el palacio presidencial. Desde hace algunos meses, se reúnen altos funcionarios del Estado y emisarios paramilitares. ¿Su misión? Buscar pruebas contra los "prevaricadores golpistas que

ron humo expedientes instruidos para la inculpación de criminales.

Para los sindicatos, esta guerra encarnizada contra "el terrorismo" tiene como objeto camuflar los fracasos del poder: un desempleo en alza, una economía en baja, 70% de pobres y 27% de aumento de las plantaciones de hoja de coca. En semejante contexto, ¿por qué Uribe entablaría un diálogo o negociaciones con la oposición armada? "Sin las FARC—afirma el sindicalista Luciano Sanín—, su política no tendría ningún sentido. Debe mantener la amenaza terrorista para justificar sus medidas de 'seguridad democrática', los gastos militares (el 6% del PBI) y la ausencia de inversión social."

"Ser sindicalista es lo peor que le puede pasar a alguien en Colombia. Es una actividad suicida"

Acusados por el Presidente de "desestabilizar el Estado", los sindicalistas se sienten más amenazados que nunca. Según la Escuela Nacional de Sindicalistas (ENS), 2 684 sindicalistas fueron asesinados en 22 años; de ellos, 473 lo fueron durante los dos mandatos de Uribe (41 en 2008).

La acción de los sindicatos en el Congreso estadounidense condujo a los demócratas a suspender la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) Colombia-Estados Unidos. Principal objetivo de Uribe, ese revés explicaría en parte la represión. Pero para el presidente de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), Tarcisio Mora, "el Presidente (también) quiere hacer realidad el sueño neoliberal: disponer de una mano de obra barata, explotable a voluntad, sin derechos ni sindicatos", según el modelo de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), donde los empleadores se ven

eximidos de cualquier obligación de negociación colectiva y de gastos en salud y jubilación.

Los otros sectores económicos no escapan a esta realidad. "De 19 millones de trabajadores—señala Mora—, menos de cinco millones gozan de protección social. Apenas 850 000 están organizados y uno de cada cien dispone de un acuerdo colectivo." En cinco años, según la ENS, el Ministerio de Protección Social se negó a registrar 515 nuevas organizaciones sindicales, lo cual confirma los dichos de Sened Niño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode): "En este país, es más fácil organizar una guerrilla que un sindicato".

Exponiendo su vida y la de sus familias, los sindicalistas colombianos ejercen en efecto una actividad suicida. "Tengo que esconderme, proteger mi vida y la de mis hijos, mudarme cada vez que saqueen mi casa y recibir amenazas de muerte—cuenta una dirigente—. Para mi familia, ser sindicalista es lo que peor que le puede pasar a alguien en este país."

En cuanto a las mujeres, las salvajadas que padecen "están fuera de los esquemas que caracterizan la violencia política—analiza Pilar Rueda, profesora de la universidad de la Salle—. Se las apuñala para que parezca un crimen pasional, son víctimas de abusos sexuales o trabajos forzados y representan el 70% de la población desplazada". En pocas palabras, concluye Rueda, con el pretexto de combatir la guerrilla "los paramilitares combaten contra una sociedad civil no armada".

Sin garantías para defender sus derechos, la lucha no violenta de la sociedad colombiana que quiere construir una verdadera democracia en un país en guerra parece una apuesta. Sin embargo, el país rebosa de iniciativas individuales y colectivas alimentadas por la esperanza de obtener algún día el apoyo de la comunidad internacional. "No podemos competir con los medios, las armas, el dinero o el poder—afirma Lilia Solano, defensora de los derechos humanos—, pero podemos perseverar en nuestra lucha. No sé si no estaremos sufriendo una locura colectiva, pero nunca dejaremos de resistir."

"Uribe debe mantener la amenaza terrorista para justificar sus medidas de 'seguridad democrática'"

les hacen el juego a la guerrilla y al terrorismo". Es así como Uribe califica a esos magistrados y jueces de instrucción que hurgan en la "parapolítica". "Esas acciones ponen en peligro nuestras vidas y toda la credibilidad de nuestra institución y nuestra acción—afirma Delgado—. ¡Si el jefe de Estado se burla de la Justicia, imagínese los delincuentes!".

En todo el país ya hubo huelgas generales de funcionarios del Poder Judicial. En septiembre de 2008, durante 44 días, un movimiento nacional a favor de la independencia de la Justicia y la revalorización salarial movilizó a más del 80% de los efectivos de la institución judicial. El jefe de Estado replicó decretando el estado de emergencia.

Y cuando no es el Ejército, es el terror anónimo el que neutraliza el descontento. La noche del 31 de agosto, una bomba destruyó el Palacio de Justicia de la ciudad de Cali. Además de costar la vida de cuatro personas, con el atentado se hicie-

(1) Sin embargo, la movilización fue mucho más débil que la manifestación anterior en apoyo a los rehén, el 20 de julio: esta última había reunido a cuatro millones de personas.

(2) En Colombia, hay varios ONG que acusan al Estado de "la mayoría de las violaciones de los derechos humanos". *Le Monde*, 27 de septiembre de 2008.

(3) Unas 305 000 personas fueron víctimas de los desplazamientos forzados en 2007; 270 000 durante el primer semestre de 2008. Amnistía Internacional, "La población civil, víctima del conflicto interno", 28 de octubre de 2008; www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/colombia-paz-conflicto-armado-datos-cifras-20081028

(4) *El Nuevo Herald*, Miami, 15 de octubre de 2008.

(5) Según la ONGIC, de 1 350 000 indígenas—102 pueblos, 64 lenguas y 4% de la población—, el 45% no tiene territorio, el 80% vive en situación de pobreza extrema y casi 54 000 fueron desplazados por la violencia.

(6) *Minga*: convocatoria para realizar un trabajo colectivo.

(7) Según el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, de los

31 671 paramilitares desmovilizados, sólo 116 fueron llevados a juicio y ninguno fue condenado.

(8) A la vez, policía política y servicios de inteligencia.

(9) Por otra parte, en 2004 Noqueza arguetó, con la ayuda del dirigente paramilitar Rodrigo Tovar, alias "Jorge 40", un plan de desestabilización de Venezuela; también, durante las elecciones de 2002, dirigió un gran fraude electoral sin el cual el presidente Uribe no habría podido ser elegido en primera vuelta.

(10) Iván Cepeda Castro y Claudia Girón Ortiz, "Exterminio de militantes de la Unión Patriótica de Colombia", *Le Monde diplomatique en español*, mayo de 2005.

(11) Como la Constitución no permite que un jefe de Estado asuma dos mandatos sucesivos, Uribe habría corrompido a la congressista Yidis Medina para votara a favor de la reforma. El texto fue aprobado gracias a ese voto.

(12) "La parapolítica está amenazada", *Semana*, n° 1374, Bogotá, 1-8 de septiembre de 2008.